

C.A. de Santiago

Santiago, quince de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

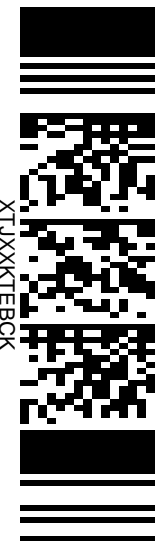
En esta causa Rit N° 114-2023 y Ruc N° 2201274935-3 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por sentencia de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se condenó a **MATIAS FELIPE LUNA RODRIGUEZ** a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales, como autor de dos delitos consumados de robo con intimidación, delito previsto y sancionado en el artículo 436, inciso 1°, en relación al artículo 432, ambos del Código Penal, cometidos el 16 de diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa, en perjuicio de Constanza Durán Figueroa y el 17 de diciembre de 2022 en la comuna de La Florida, en perjuicio de Matías Ovalle.

En contra de esa decisión la defensa interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública del pasado 28 de noviembre, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy.

Y considerando:

1°) Que el recurso de nulidad se fundó, de manera principal, en la causal contenida en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por infracción a la garantía de imparcialidad del tribunal y del debido proceso, garantizadas en los artículos 19 N° 3, inciso 7° (sic.) de la Constitución Política de la República, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Arguye, en primer término, la insuficiencia de la prueba incorporada por el Ministerio Público la que se sostiene únicamente



en la confesión del acusado, pues sólo una de las tres víctimas reconoce al acusado Luna Rodríguez mediante la diligencia de reconocimiento en set fotográfico, la que se realizó sin cumplir las reglas del Protocolo interinstitucional vigente sobre la materia elaborado por ambas policías y el Ministerio Público, pues se llevó a cabo en la calle, se le exhibieron a la supuesta víctima 7 fotos en lugar de las 20 que ordenan dichas reglas técnicas y se le indicó que el imputado ya estaba detenido. Añade que la sentencia descarta este cuestionamiento sin ninguna base probatoria, ignorando las respuestas de la víctima en el juicio que lo confirman.

Por otra parte, denuncia la falta de imparcialidad de los sentenciadores al valorar el referido reconocimiento, y señalar que su cuestionamiento por la defensa, en relación a una probable inducción de los policías era por lo menos “insolente”, lo que denota un prejuicio de los sentenciadores en favor de los policías. En el mismo sentido, los jueces consideran su solicitud para recalificar la participación del acusado a la de cómplice, como “graciosa”, calificación peyorativa que permite sostener que existió un prejuicio negativo a la tarea de la defensa en el juicio que afectó sustancialmente la apreciación de la prueba rendida en perjuicio del acusado.

En subsidio de la anterior, en el arbitrio se formula la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 297 y 342 letra c) del mismo código, expresando como tres graves faltas a los principios lógicos que deben guiar el razonamiento judicial en nuestro sistema procesal penal, lo siguientes:

Primero, el calificar de ajustado al Protocolo ya mencionado la diligencia de reconocimiento en set fotográfico realizado respecto la



víctima del segundo hecho, sin expresar razón para ello, quebrantando el principio lógico de razón suficiente, en circunstancias que se le exhibieron 7 fotografías en lugar de las 20 que ordena el protocolo y se ejecutó en un lugar inadecuado.

En segundo lugar, la sentencia establece la participación del acusado en el primer hecho a partir de la descripción de sus atacantes que realizó la víctima, a pesar que la sentencia establece como cierto que el acusado permaneció al volante de su vehículo y nunca descendió para intimidar a la víctima, vulnerando ahora el principio lógico de no contradicción.

Y en tercer lugar, el fallo califica de “graciosa” la petición de recalificación de la participación del acusado a la de cómplice, con la que perseguía la imposición de una pena menos gravosa que permita la más pronta resocialización del acusado, no obstante que el voto de prevención discurre en el mismo sentido, lo que infringe el principio lógico de no contradicción.

Al concluir pide que se declare la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral, ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

2°) En el considerando 11° de la sentencia recurrida se tuvieron por acreditados los siguientes hechos que son objeto de la condena:

Hecho N° 1:

“El día 16 de diciembre de 2022, siendo aproximadamente las 21:40 horas, el acusado Matías Felipe Luna Rodríguez previamente concertado para la comisión del delito junto con otros sujetos aun no identificados, se encontraban a bordo del vehículo placa patente única BJZR-23, tipo sedán, marca Nissan, modelo Tiida, color negro, año 2012, de propiedad del acusado y conducido por éste y en una



calle de la comuna de Ñuñoa, el acusado detiene la marcha del automóvil mientras descienden los otros dos acompañantes quienes se aproximan a la víctima doña Constanza Durán Figueroa, quien se encontraba estacionando el vehículo placa patente única JFKL-42, marca Ford, modelo Explorer XLT, color blanco, año 2017, en las afueras de su domicilio, proceden a intimidarla con un arma aparentemente de fuego, tipo pistola, obligándola a descender del automóvil.

Los sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida con el vehículo sustraído, acompañados por el vehículo utilizado para ejecutar el robo, conducido por el acusado Matías Felipe Luna Rodríguez.”

Hecho N° 2:

“El día 17 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 23:40 horas, el acusado Matías Felipe Luna Rodríguez previamente concertado para la comisión del delito junto con otros sujetos aun no identificados, se encontraban a bordo de un vehículo marca Ford, modelo Explorer, color blanco, el que no portaba sus placas patentes adosadas, el cual era conducido por el acusado, y al llegar a calle Jardín Alto frente al N° 8471, comuna de La Florida, el acusado detiene la marcha del automóvil mientras descienden los sujetos desconocidos, quienes se aproximan a la víctima don Matías Humberto Ovalle Álvarez, quien se encontraba en el vehículo placa patente única JCTB-44, marca Mazda, modelo CX-5, color negro. Uno de los sujetos abre la puerta del copiloto, se sube portando un arma de fuego con la cual intimida a la víctima, apuntándole al pecho, y de esta manera, la obliga a descender, sustrayendo el automóvil.



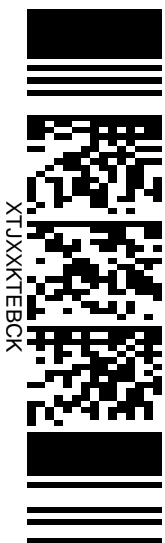
Los sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida con el vehículo sustraído y acompañados por el vehículo utilizado para ejecutar el robo, el que era conducido por el acusado Matías Felipe Luna Rodríguez.”

Estos hechos fueron calificados como dos delitos de robo con intimidación, ilícito previsto y sancionado en el artículo 436 en relación con el artículo 432 y 439 del Código Penal, en los que el acusado Luna Rodríguez es responsable como autor.

3°) Respecto de la causal principal, la Corte Suprema por resolución de 18 de octubre del año en curso, de conformidad a la letra a) del inciso 3° del artículo 383 del Código Procesal Penal, remitió los antecedentes a este Tribunal para el conocimiento y fallo del recurso, por las siguientes razones: *“Que de una atenta lectura del libelo, lo que se reprocha por la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, al fallo de primera instancia, podría tener como sustento real un reclamo a la valoración de los antecedentes y a la fundamentación de la sentencia, lo que es propio del motivo de invalidación del artículo 374 letra e) del cuerpo legal antes citado, lo que es materia de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva.”*

De ese modo, esta Corte de Apelaciones se ceñirá al examen de los defectos referidos a la valoración de los antecedentes y fundamentación de la sentencia que se formulen en el recurso con su causal principal, en tanto se encuadren en la citada causal de la letra e) del artículo 374 de competencia de este tribunal.

4°) Como se dijo, en primer término se cuestiona con la causal principal la manera en que se realiza la diligencia de reconocimiento en set fotográfico por la víctima del hecho N° 2, al no seguir las



pautas que al respecto se enuncian en el Protocolo Interinstitucional de Reconocimiento de Imputados, elaborado por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público, en lo relativo al lugar en que debe efectuarse esa diligencia y el número de imágenes distractoras a utilizar.

De partida conviene aclarar que el aludido Protocolo no puede establecer requisitos para que los elementos probatorios que se obtengan de esa diligencia, o los que deriven de ella, puedan considerarse como un antecedente válido y útil en el juicio para el asentamiento de la participación de una persona en los hechos objeto de la acusación, determinación esta última que sólo compete al órgano jurisdiccional competente. Ese Protocolo únicamente puede fijar condiciones que propendan a que así sea considerado por los tribunales, al buscar reducir las posibilidades de error de parte de quien efectúa el reconocimiento, siendo sus disposiciones a lo más vinculantes para los miembros de las instituciones que los suscriben pero no para los jueces, los que incluso cumpliéndose todas esas instrucciones o guías, podrían concluir igualmente que la forma en que se ejecutó la diligencia no da garantías suficientes para descartar razonablemente un error de parte quien realiza el reconocimiento.

Es así como en la misma Presentación de este protocolo se explica que con él se *“busca homogeneizar la forma de realizar la diligencia y fijar estándares mínimos de calidad que se deben cumplir en los reconocimientos para que constituyan un real aporte al esclarecimiento de los hechos, otorgándole a esta actuación un mayor nivel de certeza y respecto de las garantías a los ciudadanos”*

Así puestas las cosas, de no haberse apegado los agentes a lo instruido en el referido Protocolo ello no trae como necesaria



consecuencia la invalidez o inutilidad de los elementos probatorios que emanen de esa diligencia de reconocimiento en set fotográfico y que luego se incorporen como prueba al juicio, sino únicamente incidirá en el valor que se le dé a ese reconocimiento para establecer la participación del imputado en los hechos objeto de la acusación.

Ahora bien, si el Ministerio Público junto a las policías que lo auxilian en su labor de investigación, están contestes en que las pautas contenidas en el Protocolo impactan de manera relevante en la disminución de la tasa de error en los reconocimientos fotográficos, de no observarse aquéllas se admite tácitamente que las probabilidades de equivocación aumentan, lo que requerirá por parte del acusador su complemento o “compensación” con otros medios de prueba y mayor atención de parte de los sentenciadores en que ello así ocurra en el juicio.

5°) Veamos ahora qué dice el mentado Protocolo sobre los puntos objetados en el recurso.

En la sección II apartado 8. sobre “Frecuencia, oportunidad y lugar de realización”, indica *“El reconocimiento puede realizarse en una unidad policial, en dependencias del Ministerio Público e incluso, en dependencia de Gendarmería de Chile u otro lugar”*. Y en la sección III apartado 2.2.1. sobre “Conformación del set” señala *“Se confeccionará a los menos dos set fotográficos cada uno deberá formarse con diez fotografías a razón de una imagen por hoja, de las mismas proporciones y colores”*.

Pues bien, Matías Ovalle Álvarez, víctima del hecho N° 2 que realiza el reconocimiento, como se lee en el considerando 7°, sobre el lugar y forma en que se ejecuta, expresó que *“afuera de su casa, los de la PDI le mostraron fotos para ver si reconocía a alguno de los*



individuos que lo asaltó, y, entre ellos identificó a uno, al chofer. Le dijeron si estaba seguro de su reconocimiento y él les aseguró. A la pregunta de cuántas fotografías se le exhibieron contestó, como preguntándose: ¿‘habrán sido unas 7 fotos’?. No recordó cuantas imágenes había por hoja, pero en general todos los que vio en ellas eran menores de edad.”

6°) Entonces, efectivamente el reconocimiento se hizo fuera de la casa de la víctima, pero sin tener más antecedentes si correspondía a su antejardín, a la vía pública, u otro, lo que en todo caso no contraviene el referido Protocolo, el que expresamente permite que se lleve a cabo en lugares distintos de los que indica a título meramente ejemplar, lo que resulta esperable, pues de otra forma el reconocimiento fotográfico no se podría concretar, por ejemplo, en un centro de salud si la víctima se encuentra hospitalizada, y ni siquiera en una dependencia de un tribunal, no obstante todas las garantías que éste otorgue para su correcta ejecución.

Por otra parte, el guarismo 7 que señala la víctima es sólo una aproximación porque no recuerda el número de imágenes que le fueron exhibidas, no siendo posible descartar que sean más, incluso 10 como sugiere el Protocolo.

En cuanto los policías le habrían indicado a la víctima que el imputado ya estaba detenido cuando efectúa el reconocimiento, amén de no ser un punto tratado en el Protocolo, no se advierte como ese solo dato puede inducir de algún modo en el resultado de la diligencia, aspecto que el recurso tampoco explicita.

7°) De esa manera, ni siquiera se cuenta con elementos para afirmar con una probabilidad prevalente que no se cumplieron las



instrucciones del Protocolo mencionado, como lo pretende el recurrente, lo que se colige del mero contraste de las disposiciones del mismo con los antecedentes que expuso el fallo y, concordantemente la sentencia concluye en su motivo 12° que *“no se advierte la ilicitud del reconocimiento fotográfico del imputado que alega el defensor, por lo que será desestimada, desde que el procedimiento fue efectuado por tres funcionarios distintos a los que llevaban la investigación y agregado al informe del que dio cuenta Godoy en el que aparece que éste fue realizado conforme a los protocolos existentes para ello”*, lo que reitera en el considerando 13°: *“Respecto del hecho dos cuestiona el reconocimiento fotográfico, lo que se ha señalado que se realizó conforme al protocolo ya que la diligencia fue agregada formalmente el informe cumpliendo las normas para ello.”*

8°) La sentencia, por ende, sí explica las razones por las que estima que la diligencia no es ilícita, y no resulta exigible que se detuviera en desarrollar en particular el por qué considera que se satisfacen las pautas dubitadas del protocolo -lugar y número de imágenes-, desde que en la prueba recibida en el juicio no hay ningún elemento que permita inferir con plausibilidad lo contrario.

9°) También como parte de la causal principal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, como ya se dijo, en el recurso se reclama por la falta de imparcialidad en la valoración de las pruebas, lo que se sustenta en dos expresiones usados por los sentenciadores, esto es, calificar de “insolente” la insinuación de la defensa de que los policías inducen a la víctima en el reconocimiento del imputado en set fotográfico, y al considerar de “graciosa” la

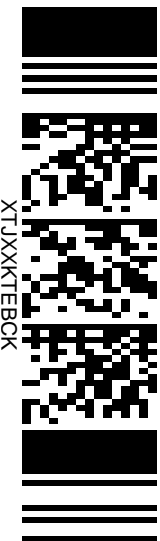


petición de recalificación de autoría a complicidad de la participación de Luna Rodríguez.

10°) Teniendo presente que como se explicó en el motivo 3° *ut supra*, sólo cabe analizar esta alegación como un defecto de valoración de los antecedentes y de fundamentación de la sentencia, no se aprecia que, aun de compartirse que se trate de expresiones inapropiadas e incluso desafortunadas, su uso haya mermado el cumplimiento del deber de motivar el rechazo de las alegaciones calificadas en esa forma, como se constata con la lectura de los considerandos 12° y 13°, en las secciones extractadas más arriba, en lo concerniente al reconocimiento fotográfico.

Y en lo atinente a la calificación de la participación del acusado, ello se razona en el motivo 12° expresando que *“se desestima la alegación de la defensa en cuanto a que la participación del acusado sería en calidad de cómplice por cuanto se estima que intervino como autor de una manera directa e inmediata en los hechos acreditados. En efecto, fuera de haber señalado el acusado en el sentido de que se ponían de acuerdo para realizar los ilícitos, que él sabía que iban a robar con el Luchito y el Nacho, no admite duda o cometario su papel en cada robo. El conducía un auto de su propiedad en el primer delito y en el segundo conducía el auto que habían robado el día anterior. Traslataba a sus amigos, los esperaba mientras éstos se bajaban a intimidar a las víctimas y se retiraba solamente una vez que éstos lograban el botín, esto es subirse a los vehículos recién robados y huir del lugar con el vehículo sustraído.*

Se incorporó como documental Certificado de inscripción y anotaciones vigentes, de un auto Nissan Tiida 1.6, placa patente



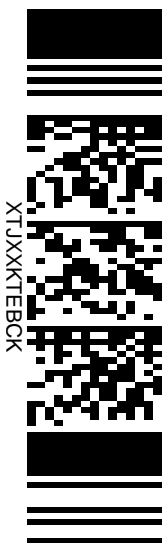
única BJZR- 23, de propiedad del acusado Matías Felipe Luna Rodríguez, adquirido 3 de octubre de 2022, emitido por el Registro vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El documento que antecede da cuenta que el acusado de 19 años era el dueño del vehículo que aparece conduciendo en el primer y en el tercer ilícito.

Antecedentes todos que resultan suficientes para estimar, a juicio de estos sentenciadores, que el acusado fue uno de los que efectuó, en forma directa e inmediata, todos y cada uno de los elementos del tipo penal acreditado, ya que el encartado, condujo el móvil en que se desplazaban los sujetos con los que delinquía con la finalidad de apropiarse de especies de éstas, encuadrándose su actuar en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, es decir, en calidad de autor que intervino en su ejecución de manera inmediata y directa.”

11°) Sólo a mayor abundamiento, cabe *suponer*, a falta de elementos para atribuirle otra intencionalidad, que cuando los sentenciadores se valen de las expresiones “insolente” y “graciosamente” únicamente buscan, con la primera, destacar que en su concepto no hay ningún antecedente para atribuir a los policías el haber inducido a la víctima al reconocimiento del imputado del set fotográfico que le exhiben y, con la segunda, que carece de seriedad el que se les pida que resuelvan apartándose del claro texto de la ley penal.

Aun cuando lo que buscaran expresar los sentenciadores fuera lo anterior o algo distinto, lo cierto es que tampoco aparece para esta Corte que el uso de esas expresiones denote una falta de imparcialidad al valorar la prueba y calificar la participación del



acusado, pues con ellas no manifiestan que la defensa no pueda cuestionar la forma en que se realizaron las diligencias investigativas o la calificación que a la participación le atribuye el Ministerio Público, y tanto es así, que como hemos visto, el tribunal recoge los reclamos de la defensa en su fallo y se hace cargo de los mismos.

12°) Por todas las razones anteriores, no advirtiendo esta Corte un defecto en la valoración de los antecedentes ni en la fundamentación de la sentencia, se desestimaré la causal principal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal a la que fue reconducida la de la letra a) del artículo 373 formulada por el recurrente.

13°) Que toca enseguida analizar la causal subsidiaria de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, con la que como se mencionó se plantean tres reclamos.

14°) En un primer orden, arguye el arbitrio la infracción al principio de razón suficiente, por calificar el fallo ajustado al Protocolo tantas veces mencionado, la diligencia de reconocimiento fotográfico efectuada por la víctima del segundo hecho, sin expresar razón para ello, asunto que ya fue tratado latamente con ocasión del estudio de la causal principal, a lo cual nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.

15°) En segundo lugar, indica el recurrente que la sentencia sienta la participación del acusado en el primer ilícito a partir de la descripción de su vestimenta que hace la víctima, a pesar que la sentencia establece como hecho acreditado que aquél permaneció al volante de su vehículo y nunca descendió para intimidar a la víctima, lo que conculca el principio lógico de no contradicción.



16°) En el considerando 12° se explica que *“la participación del acusado en el hecho N°1, perpetrado el día 16 de diciembre de 2022, se sustenta en las imágenes fotográficas que se extrajeron de su teléfono, las que lo vinculan a la especie sustraída. Además el testigo Ovalle Álvarez, víctima del hecho N°2, ubica al acusado al día subsiguiente de la ocurrencia del hecho N°1 conduciendo justamente vehículo Ford Explorer blanco, producto del primer ilícito, ello unido a lo expresado por los funcionarios policiales que participaron en la investigación.*

Por otra parte de gran relevancia resultó la aseveración de la víctima del hecho uno, doña Constanza, que si bien no vio los rostros de los delincuentes, por lo que no pudo reconocerlos en el ejercicio realizado para ello, aseguró que uno de ellos vestía una polera blanca y el otro tenía lentes ópticos, siendo del caso señalar que en las fotografías que se exhibieron, TRES HORAS DESPUÉS de ocurrido el ilícito aparece justamente Matías Luna Rodríguez luciendo dicha prenda en una fotografía en que aparece sobre el vehículo recién sustraído. Del mismo modo uno de sus acompañantes en las fotografías en que ‘lucen los trofeos’ se ve claramente que usa lentes ópticos”.

17°) Efectivamente la víctima del hecho número uno, en su declaración contenida en el motivo 7° refiere que no vio quién conducía el vehículo en que se movilizaban los tres sujetos que la abordan, siendo el que vestía polera blanca uno de los dos que tocan el vidrio de su auto y le piden que se baje (*“fue abordada por tres sujetos que llegaron en un auto tipo hash back de color gris oscuro. Dos de ellos le tocaron el vidrio, ambos tenían el rostro semi cubierto, el que vio mejor era moreno y tenía lentes, el otro tenía una polera*

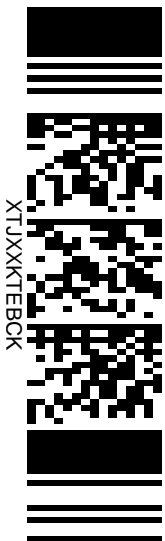


blanca ... A la defensa contestó que el vehículo en que se movilizaban los sujetos tenía la parte trasera curva y era oscuro. No vio quien lo conducía”).

Lo anterior es distinto a lo que la ofendida habría expresado a Carlos Godoy Godoy, Sub Inspector de la Policía de la Investigaciones de Chile, quien señaló que: *“doña Constanza Duran Figueroa, quien reconoce que el sujeto que manejaba el vehículo en que se trasladaban los antisociales al momento de la sustracción del móvil en que ella se desplazaba, lo hacía con una polera blanca de manga corta”.*

18°) De lo reseñado aparece que la víctima entrega en el juicio una versión que difiere de la aportada durante la investigación, pues en aquella instancia relata que no vio quién conducía el vehículo y antes dijo que esa persona lo hacía con una polera blanca manga corta, y éste es uno de los elementos en base a los que los policías durante la investigación y los sentenciadores en el fallo, vinculan a Luna Rodríguez con el hecho número uno, esto último no obstante que la sentencia afina como cierto que quienes descienden a intimidar a la víctima son los acompañantes de Luna Rodríguez, el que entonces habría permanecido al interior del vehículo (*“el acusado detiene la marcha del automóvil mientras descienden los otros dos acompañantes quienes se aproximan a la víctima doña Constanza Durán Figueroa”*).

Sin embargo, aun cuando se dejase de lado la coincidencia de vestimenta -al cometer el delito y en la posterior fotografía- para vincular al acusado Luna Rodríguez con el hecho número uno, dada la contradicción constatada y que no es resuelta en los fundamentos del fallo, no puede preterirse que corresponde a un elemento



accidental dentro del conjunto de circunstancias determinantes y decisorias que pondera el tribunal, esto es, que el imputado se fotografía *sólo tres horas después del robo*, junto a dos sujetos, uno de ellos usando lentes al igual que uno de sus agresores, *sobre el vehículo robado*, elementos que, considerando la cercanía temporal y la coincidencia del número de autores y de los accesorios usados por uno, permitía a los sentenciadores atribuirle autoría en el hecho, al ser plenamente concordantes y coherentes esos elementos con el que el acusado haya sido observado al día siguiente por la víctima del hecho N° 2 precisamente conduciendo el vehículo robado en el hecho N° 1 (*“el testigo Ovalle Álvarez, víctima del hecho N°2, ubica al acusado al día subsiguiente de la ocurrencia del hecho N°1 conduciendo justamente vehículo Ford Explorer blanco, producto del primer ilícito”*, considerando 12°) y con el propio relato expresado por el acusado en su confesión manifestada ante el tribunal, que el recurrente descuida: *“El 16 de diciembre de 2022, en Ñuñoa, había una mujer detenida en su vehículo Ford Explorer, él se detuvo, sus compañeros se bajaron y le quitaron el auto”* (considerando 6°).

19°) Entonces, el defecto o la contradicción es real pero carece de la trascendencia que se le atribuye, requisito sin el cual, conforme al artículo 375 del Código Procesal Penal el recurso no puede prosperar, pues recae sobre sólo uno de los elementos que se observan en la fotografía que permite relacionar al acusado con el hecho N° 1, siendo todas las demás circunstancias consideradas de ella plenamente armónicas y consistentes con la confesión del propio acusado y el reconocimiento de la víctima del hecho N° 2 que lo observa manejando el vehículo sustraído en el primer hecho, amén

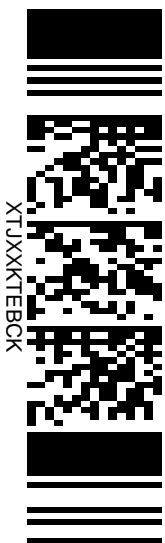


de toda la otra importante información que aportaron los policías que depusieron en el juicio.

20°) Por último, el recurrente ve como contradictorio que la sentencia califique de “graciosa” la petición de recalificación de la participación del acusado a la de cómplice con lo que la defensa buscaba obtener una pena más baja que permitiese su pronta resocialización, mientras que el voto de prevención argumenta en el mismo sentido, lo que quebrantaría el principio lógico de no contradicción.

Más allá que se invoca la causal de nulidad de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en relación a los artículos 297 y 342 letra c) del mismo código y, por ende, cuestionando la valoración de la prueba mediante la que se establecen los hechos, y no así la fundamentación legal o doctrinal con la que se califican los hechos o se determina la pena (que corresponde a la letra c del artículo 342), conviene aclarar que la prevención en cuestión importa precisamente que se comparte la decisión adoptada, en este caso, la condena del imputado por los hechos números 1 y 2, sin embargo, se difiere en algún fundamento entregado para esa decisión o para la determinación de la pena impuesta, como lo fue en este caso en relación al artículo 449 del Código Penal, cuya aplicación el voto de prevención estima desproporcionado atendidas las circunstancias particulares de esta causa.

De esa forma, no hay contradicción alguna entre la sentencia y la prevención, es decir, la juez preveniente no afirma en el fallo lo que luego niega en su prevención, porque esta última justamente supone que la jueza que la suscribe no compartió lo razonado en ese punto en la sentencia.



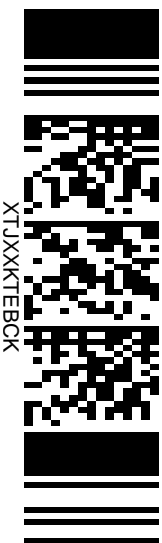
21°) Que por todo lo expuesto no se ha demostrado que se haya incurrido en el motivo absoluto de nulidad de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, impetrado subsidiariamente, ni que el mismo haya tenido influencia en lo dispositivo del fallo, debiendo por tanto ser desestimado el presente arbitrio.

Y visto, también, lo dispuesto en los artículos 360, 372, 373 letra a) y 374, literal e), 384 y 385 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido en favor de **MATIAS FELIPE LUNA RODRIGUEZ** en contra de la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, en la causa Rit N° 114-2023 y Ruc N° 2201274935-3, y contra el juicio que le precedió, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y comuníquese.

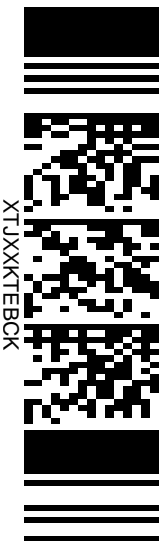
Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

N°Penal-5388-2023.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia López M. y los Ministros (as) Suplentes Manuel Esteban Rodríguez V., Matías Felipe De La Noi M. Santiago, quince de diciembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a quince de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>